

Aún no se aprenden las lecciones de los programas contra la pobreza

Gary M. Galles

Una de las realidades menos conocidas de la guerra contra la pobreza fue que, si bien las tasas de pobreza estaban cayendo sustancialmente antes de que comenzara, ese progreso se detuvo abruptamente, fantásticamente, con su implementación. Sin entender esto, la gente puede permanecer ciega ante la lección de cómo «luchar» contra la pobreza puede socavar el progreso contra ella. Y puede ser particularmente importante comprender esto ahora que, décadas después, efectos similares parecen estar extendiéndose a una población mucho mayor.

Antes de abordar sus implicaciones actuales, sería beneficioso revisar las explicaciones de cómo fracasó la guerra contra la pobreza. En mi opinión, la explicación más reveladora proviene de James Gwartney y Thomas McCaleb, en “*Have Antipoverty Programs Increased Poverty?*”

Gwartney y McCaleb discutieron cuatro formas en que esos programas empeoraron los incentivos: a través de mayores beneficios reales, mayores tasas impositivas implícitas, menores incentivos para adquirir y retener habilidades y menores incentivos para evitar elecciones adversas de estilo de vida. Es de particular importancia su análisis de por qué los efectos de tales programas serán más adversos, tanto cuanto más duren como cuanto más jóvenes sean los afectados.

El primer mecanismo es que «los aumentos en el valor real de los pagos de prestaciones hacen que la dependencia del Gobierno sea aún más atractiva, en comparación con la alternativa del autofinanciamiento». Ese efecto será mayor para los trabajadores más jóvenes, cuyo potencial de ingresos es menor que el de los trabajadores de mayor edad, con mayor educación y experiencia.

El segundo mecanismo surge porque los programas contra la pobreza, sujetos a verificación de recursos, reducen los beneficios, a medida que los hogares ganan más, imponiendo el equivalente a un impuesto adicional sobre la renta, sobre el aumento de los ingresos. Y cuando se tiene en cuenta la realidad de múltiples programas, esa tasa impositiva implícita puede ser muy alta: mucho más alta que la tasa impositiva oficial más alta sobre los ingresos del trabajo y, en algunas circunstancias, muy por encima del 100 %. En consecuencia, «tasas impositivas marginales implícitas tan altas suponen un importante desincentivo para trabajar para aquellas personas cuyos ingresos potenciales son relativamente bajos».

El tercer mecanismo reduce las habilidades, porque las personas que no han utilizado sus habilidades durante periodos prolongados experimentan una erosión de esas habilidades. Esto no solo empeora cuanto más persisten dichos incentivos, sino que el efecto es mayor para los trabajadores más jóvenes porque: «A medida que las transferencias hacen que la dependencia sea más atractiva en relación con la experiencia laboral, la educación y otras formas de inversión en capital humano, los jóvenes receptores no logran desarrollar habilidades que en el pasado les permitieron salir de la pobreza». Es decir, no se trata solo de que las habilidades existentes se erosionen con el desuso, sino que, cuando los desincentivos significan que es poco probable que las habilidades rindan frutos económicamente, el incentivo para adquirir esas habilidades en primer lugar también disminuye.

El efecto de riesgo moral surge porque aumentos sustanciales en la asistencia gubernamental pueden permitir que algunos elijan «un estilo de vida que aumente la probabilidad de pobreza». Y ese incentivo es más perjudicial para la vida productiva cuanto antes comienza.

Gwartney y McCaleb observaron que apenas había efectos adversos sobre los incentivos en las familias de bajos ingresos, cuyos miembros estaban jubilados, y efectos menores en aquellas en edad de trabajar, cuanto mayores eran. Los efectos fueron mucho más severos para los más jóvenes, particularmente aquellos que aún no estaban en la fuerza laboral y que estaban (o deberían estar) en la etapa de adquisición de habilidades.

Para comprobar si los datos correspondían a su análisis, Gwartney y McCaleb fueron un paso más allá. En lugar de simplemente observar las tasas de pobreza generales, analizaron las tasas de pobreza desglosadas por edades del «cabeza de familia», para comparar la magnitud de las consecuencias de los efectos desincentivadores en los hogares más jóvenes de bajos ingresos, en comparación con los hogares más antiguos de bajos ingresos.

Los efectos que encontraron fueron significativos. Después de las disminuciones sustanciales de la pobreza en todos los grupos de edad antes de que comenzara la guerra contra la pobreza, tanto las tasas de pobreza oficiales como las tasas de pobreza ajustadas por beneficios en especie (no contabilizados oficialmente como ingresos) para las personas mayores (para quienes los efectos desincentivos son mínimos), siguió cayendo drásticamente, del 15.9 %, en 1968, al 5.5 %, en 1982. Para el grupo de edad de 45 a 54 años, las tasas de pobreza ajustadas cayeron del 6.7 %, en 1968, al 5.8 %, en 1975, aumentando posteriormente al 8 %. Para el grupo de edad de 25 a 44 años, las tasas de pobreza ajustadas solo cayeron del 8.6 % al 8.5 % al principio, pero aumentaron sustancialmente después, al 12.3 %, en 1982. Finalmente, para el grupo más joven estudiado, los hogares menores de 25 años, las tasas de pobreza ajustadas aumentaron del de 1968 en adelante, del 12.3 %, en 1968, al 24 %, en 1982.

Entonces, ¿qué importancia tienen estas «noticias viejas» para las noticias actuales? Hubo enormes aumentos en esos desincentivos tanto durante la Gran Recesión como durante el curso de la recuperación de la COVID-19 y sus políticas gubernamentales asociadas.

El nivel real (después de ajustar por inflación) de los beneficios gubernamentales aumentó, porque la duración de los beneficios por desempleo se extendió sustancialmente (a 99 semanas en su punto máximo). Durante un periodo en 2020, el Gobierno federal agregó \$600 por semana a los beneficios estatales de desempleo (en muchos casos, haciendo que esos beneficios no solo sean mayores a los que de otro modo serían elegibles, sino también más de lo que podrían ganar). La elegibilidad para Medicaid (Medi-Cal, en California) se amplió significativamente, los subsidios para las políticas de Obamacare crecieron e incluso hubo programas de suspensión de alquileres que permitieron a muchos permanecer en sus hogares sin pagar alquiler.

En la medida en que los programas de asistencia se centren en familias de bajos ingresos, esos programas aumentarán la tasa impositiva marginal acumulativa de los beneficiarios (como la llaman los economistas, aunque técnicamente es una tasa marginal acumulativa de reducción de beneficios) y restarán más de lo que reciben, para evitar que el salario neto produzca para otros en los mercados. La eliminación gradual de los subsidios de Obamacare con ingresos hace lo mismo. Aún más sorprendentes son los «abismos de elegibilidad», donde beneficios sustanciales (por ejemplo, Medicaid gratuito para un padre con hijos pequeños, que vale miles de dólares) desaparecen por completo cuando se alcanza un cierto nivel de ingresos.

El incentivo para dejar que las habilidades se deprecien por el desuso y, lo que es más importante, no adquirir habilidades en primer lugar, procedió principalmente de las restricciones y los efectos del bloqueo sobre las oportunidades de empleo y una serie de políticas educativas bajo la COVID, desde la instrucción en línea ineficaz hasta la inflación de calificaciones que socavó la capacidad potencial de los empleadores para diferenciar entre estudiantes con habilidades particulares y aquellos que no las tienen. Los esfuerzos por abandonar las escuelas públicas tradicionales y los desincentivos que produjeron, también se vieron obstaculizados por ataques a las escuelas chárter y propuestas de vales.

Muchos cambios inducidos por la COVID también enseñaron a los estudiantes lecciones equivocadas sobre la elección de un estilo de vida. Las reglas a menudo perdían todo significado. Las trampas se dispararon y prácticamente no hubo medidas para combatirlas. Los estudiantes aprendieron que el ausentismo no conllevaba ninguna sanción, en contraste con las graves sanciones que el «mundo real» puede imponer a su práctica. Aprendieron a esperar un nivel de mimos que significaba que casi cada fracaso en hacer el trabajo era excusado, y prácticamente nada de lo que pudieran hacer les daría una calificación reprobatoria en algo, y mucho menos les expulsarían de la escuela.

En resumen, parece que nuestra incapacidad para reconocer lo que Gwartney y McCaleb hicieron hace casi cuatro décadas (cuán seriamente los efectos adversos de nuestros esfuerzos por «ayudar» a la gente los lastiman) ha regresado para atormentar a los Estados Unidos con venganza. Recientemente hemos redoblado nuestra apuesta por más políticas del mismo tipo, lo que significa que veremos aún más efectos adversos.

Sin duda, eso nos ha dejado en una mala situación en muchos sentidos. Pero eso no significa que debamos rendirnos y aceptar un *statu quo* inaceptable. Todavía tenemos tiempo para reconocer que las reformas «más vale tarde que nunca» nos dan la oportunidad de ascender [CS1] [Md2] [PV3] a medida que avanzamos desde donde estamos. Como concluyeron Gwartney y McCaleb:

El actual sistema de transferencias de ingresos enfrenta a los pobres con incentivos perversos que desalientan los esfuerzos de autoayuda en el corto plazo e inducen a los receptores a tomar decisiones que retrasan su capacidad de escapar de la pobreza en el largo plazo... El problema de la pobreza continúa agudizándose no porque no estamos haciendo lo suficiente, sino más bien porque estamos haciendo tantas cosas que son contraproducentes.